



**UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”**

ESCUELA DE POSGRADO

**MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

**La naturaleza jurídica del derecho a la objeción y su relación con la
libertad de conciencia en el ordenamiento constitucional Peruano –
periodo Mayo - Octubre 2017**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

AUTOR:

Bach. Leandro Marcelino Acuña Fabian

ASESOR:

Dr. Oswaldo Alberto Mendoza Otiniano

Lambayeque – Perú – 2022

La naturaleza jurídica del derecho a la objeción y su relación con la libertad de conciencia en el ordenamiento constitucional Peruano – periodo Mayo -Octubre 2017



Bach. Leandro Marcelino Acuña Fabian

AUTOR



Dr. Oswaldo Alberto Mendoza Otiniano

ASESOR

Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo para optar el grado académico de: MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD.

APROBADO POR:



Dr. Miguel Arcangel Arana Cortez

PRESIDENTE


SECRETARIO

Dr. Humberto Falla Lamadrid

SECRETARIO


VOCAL

Mg. Mary Isabel Colina Moreno

VOCAL

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

179

Siendo las 18 horas del día Vientresba de Junio del año Dos Mil Diecinueve, en la Sala de Sustentaciones de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del jurado, designados mediante Resolución N° 0824-2019-EPG de fecha 27-06-2019, conformado por:

D. Miguel Arcángel Arana Cortez PRESIDENTE (A)
D. Humberto Fajalla Lamadno SECRETARIO (A)
Dra. Mary Isabel Achana Alvarado VOCAL
D. Osvaldo Alberto Mendoza Pita ASESOR (A)

con la finalidad de evaluar la tesis titulada

"La Naturaleza Jurídica del Derecho a la
Objeción de conciencia en relación con la libertad
de conciencia en el ordenamiento jurídico
Peruano - Periodo mayo/octubre 2017
 presentado por el (la) tesista Leandro Marcelino Acuña Pita
 sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 0826-2019-EPG de fecha 27-06-2019

El Presidente del jurado autorizó el inicio del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 75 puntos que equivale al calificativo de Buena.

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de Maestría en Derecho con mención en
Constitución y Gobernabilidad.

Siendo las 18:45 horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.

[Firma]
 PRESIDENTE

[Firma]
 SECRETARIO

[Firma]
 VOCAL

ASESOR



DEDICATORIA

.A mi Padre Celestial, a los seres que más amo en este mundo, mis padres Marcelino y Gladis, hermanos, mis hijos Jonathan y Adrianita, mi esposa Sonia; por ser la fuente de inspiración y motivación para superarme cada día más, quienes con su sencillez y humildad supieron ser los verdaderos forjadores de mi superación, y los que alimentan mi vocación al servicio de los demás.

AGRADECIMIENTO

Agradecimiento a todas las personas por todo su apoyo brindado durante la realización, ejecución y culminación de mi tesis.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN.....	5
INTRODUCCIÓN.....	09
CAPITULO I	13
I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO	13
1.1 Como surge el problema.....	13
1.2 Justificación e importancia.....	14
1.4 Metodología empleada.....	15
1.4.1 Problema general.....	16
1.4.2 Objetivo general.....	16
1.4.3 Objetivos específicos.....	16
1.4.4 Hipótesis.....	16
1.4.5 Variables.....	17
CAPITULO II.....	18
II. MARCO TEÓRICO.....	18
2.1 Antecedentes del problema.....	18
2.2 Base teórica.....	19
2.2.1 Teorías relacionadas con la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia.....	19
2.2.2 Teorías relacionadas con la libertad de conciencia	30
2.3. Libertad de conciencia en el sistema constitucional peruano: legislación y Jurisprudencia	38
2.3.1. El reconocimiento de la libertad de conciencia en las constituciones peruanas...38	
2.3.2. La libertad de conciencia en la jurisprudencia constitucional peruana.....	40
1. La objeción de conciencia y sentencia N° 0895-2001-AA/TC.....	40
2. Sentencia recaída en el expediente N° 3283-2003-AA/TC.....	42
3. Sentencia recaída en el expediente N° 2700-2006-PHC/TC.....	47
4. Sentencia recaída en el expediente N° 05680-2009-PA/TC.....	48
5. Sentencia recaída en el expediente N° 06111-2009-PA/TC.....	53
6. Sentencia recaída en el expediente N° 00928-2011-PA/TC.....	56
CAPITULO III.....	58

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN	58
CAPITULO IV	63
CONCLUSIONES.....	63
RECOMENDACIONES.....	65
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	67

RESUMEN

La presente investigación abarca y analiza el contexto del conflicto que se formulará, pero bajo una perspectiva desde la práctica al análisis de La regulación tanto internacional y nacional las mismas que han tratado los temas relacionados a la misma así mismo se toma en cuenta todas las discusiones teóricas que se han realizado en referencia al tema de la investigación el mismo que es indispensable para todo el trabajo.

Tenemos tres capítulos desarrollados el primero se va a encargar del tema relacionado a la libertad religiosa donde abarcaron subtemas como la naturaleza jurídica el concepto de evolución durante el tiempo la muestra y el análisis de las comparaciones de las legislaciones tomadas en cuenta entre otras el segundo capítulo está referido a la objeción de conciencia y también se realizará una reflexión referida al concepto y la naturaleza destacando cuál es la relevancia y la importancia que se asocia en el servicio militar la muestra y el análisis comparado de legislaciones entre otras y como tercer y último capítulo vamos a desarrollar el tema denominado el conflicto el mismo que está referido a todos los lineamiento distintos estadios procesales mundiales.

ABSTRACT

This research covers and analyzes the context of the conflict that will be formulated but under a perspective from practice to the analysis of both international and national regulation the same that have dealt with the issues related to it also takes into account all the theoretical discussions that have been made in reference to the subject of the research the same which is indispensable for all the work. We have three chapters developed the first will deal with the issue related to religious freedom where they covered subtopics such as the legal nature the concept of evolution over time the sample and the analysis of the comparisons of the legislations taken into account among others the second chapter is referred to conscientious objection and will also make a reflection referred to the concept and nature highlighting what is the relevance and the importance associated in military service the sample and comparative analysis of legislation .

INTRODUCCIÓN

Consideramos que el esfuerzo por la libertad ha sido constante en la historia del hombre y esa reivindicación civil se encuentra en la base misma de la transformación aplicada en los estados absolutistas hasta configurarse posteriormente a los estados democráticos. Si bien definir la libertad resulta un trabajo complejo, empero se puede alegar que la libertad es la base para el reconocimiento y tutela de los demás derechos fundamentales.

Asimismo, la parte democrática de la libertad admite, por un lado, el perfeccionamiento del sujeto de forma individual y a través de los grupos que se integra, y por otro lado, permite su participación en la vida pública a través de las libertades políticas. Se extiende a la libertad en dos grandes ámbitos de la vida del hombre: lo público y lo privado; lo individual y lo social.

La objeción de conciencia equivale uno de los componentes más complejos de regular en un Estado de derecho, debido a que la conciencia es un elemento muy importante con el que a veces debe enfrentarse la ley positiva, teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de conciencia es primordial en un Estado democrático. (Sales, 2016).

En este marco, los derechos y libertades reconocidas en la Carta fundamental representan actualmente una esfera de la vida del sujeto en la cual este es autónomo y actúa libremente, quedando este ámbito protegido de intromisiones de los poderes públicos o estatales y de las acciones de otros sujetos. Los derechos y libertades son, pues, resultado del valor libertad, a diferencia de la libertad en abstracto que es la facultad que posee el individuo de llevar a cabo una acción de acuerdo a su propia voluntad, por cuanto ambas constituyen zonas concretas de autonomía en las que se desenvuelven las voluntades individuales.

En 1993 y desde antes, en 1979, los legisladores optaron por incluir en la Carta Magna un amplio catálogo de derechos y libertades junto a los derechos de primera generación como el derecho a la vida, libertad de expresión, libertad ideológica y religiosa, por ejemplo figuraron otros que se han incorporado posteriormente al constitucionalismo moderno (derechos sociales, laborales, protección del medio ambiente, etc.) en las siguientes generaciones de derechos, sin embargo; la fuerza expansiva de los derechos fundamentales incita el reconocimiento de otros nuevos. Este es el caso de las más recientes demandas en torno al reconocimiento y subsiguiente regulación de la denominada objeción de conciencia.

La objeción de conciencia que se entiende como aquella fase negativa o resistencia del individuo a acatar la imposición de una norma, que entra en conflicto con sus propias convicciones y principios morales o éticos, constituye en la actualidad uno de los temas más relevantes del derecho moderno; sin embargo, pese a su creciente importancia el desarrollo legislativo, jurisprudencial y doctrinario que existe en nuestro país es mínimo.

La garantía y vigencia de los derechos fundamentales y el rol que los magistrados constitucionales tienen en la interpretación del contenido de estos derechos y de los principios constitucionales, ha resultado indispensable para determinar el grado de justicia en una sociedad. De ello, se advierte que no existe consenso sobre los fundamentos éticos y morales que los originan ni las formas de garantizarlos, siendo que en este punto las discordancias surgen dependiendo del punto de vista que se adopte, es decir, son subjetivos, así como de la concepción y teorías de derechos fundamentales con el que se trabaje un caso.

La premisa con la que se ha iniciado la presente investigación, ha sido examinar si en el ordenamiento jurídico peruano, la objeción de conciencia se encuentra relacionada o derivada de la libertad de conciencia. De esta manera, hemos realizado el análisis teniendo en cuenta las relaciones del Derecho con la justicia, con la persona humana, con su dignidad y su libertad, ésta última analizada desde

su perspectiva liberal de autonomía, y desde una perspectiva realista y constitucional de derechos fundamentales.

Por ello, se ha concurrido a teorías constitucionales y teorías de los derechos fundamentales que concibe al derecho como aquella realidad fundamental desde el punto de vista no conflictivista, que van a permitir aquel ejercicio de las atribuciones que están en acuerdo con la naturaleza de la misma persona y su dignidad. Esto tiene como consecuencia el haber investigado para poder dar una categoría de aquel concepto de la ciencia jurídica y entonces y por consiguiente definiendo a la libertad de conciencia, desde el punto de vista moral con base objetiva, diferenciándola de aquella libertad relacionada a la religión por tener el contenido íntimamente relacionado a la religión de esta misma.

Igualmente, en la presente tesis de investigación me he propuesto señalar los elementos jurídicos con la finalidad de tener una mejor teorización de la objeción de conciencia y su aplicación en las normas jurídicas peruanas. Siendo que el objetivo es analizar aquellos conceptos jurídicos, así mismo como aquella evaluación en la sentencia del Tribunal Constitucional siendo el único encargado de desarrollar los contenidos de las sentencias en relación a la objeción de conciencia, y que se viene desarrollando con la libertad de la religión y configurándose como aquel concepto del derecho autónomo, ya sea desarrollada de forma individual o asociada.

En el transcurso de esta tema investigado se ha podido constatar que en el país aun se encuentra la objeción de conciencia desde la etapa inicial, debido a que existen pocos pronunciamientos de la magistratura constitucional que la doten de contenido. En el año 2002 se dictó su primera sentencia y en el año 2010, se regulo la objeción de conciencia en un solo artículo de la Ley N° 29635 “Ley de Libertad Religiosa” de fecha 21 de diciembre de 2010. Además, se ha podido evaluar que existe una relación clara de la creación de la objeción de conciencia el mismo que es un derecho que se encuentra contenido como un tema nuevo que trae como concordancia con el artículo 3 de nuestra Constitución, así como la relación que

existe entre la jurisprudencia constitucional que regula la objeción de conciencia dentro de la libertad de conciencia y su regulación mediante la Ley de Libertad Religiosa.

Para finalizar, el trabajo de investigación se ha conseguido registrar los criterios objetivos, para demostrar que el tema de objeción de conciencia no configurándose el mismo como el derecho autónomo dentro del ordenamiento jurídico del Perú, siendo que la misma es un ejercicio del atributo de la libertad de conciencia y religión, de esta manera la dimensión religiosa de la persona percute en su conciencia, configurándose la misma en la relación de género y especie, que sirve para eximir un cumplimiento del deber jurídico, que perturba de la manera objetiva en la conciencia de la persona, con la finalidad de salvaguardar las convicciones morales éticas, porque se examina una dimensión moral del interior de la persona que omite mediante el juicio específico, para cumplir la norma, que podríamos resumirlo en el principio de “hacer el bien y evitar el mal”.

CAPITULO I

I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Cómo surge el problema

Se discute sobre la objeción de conciencia, comprendida como aquella facultad de retirarse de la norma en razón de fuertes convicciones personales basadas en temas relacionados a la ética, morales y religiosos, presenta una fricción entre la concepción de un Estado que se preocupa por aquella promoción de las garantías de las personas o protegiendo los intereses de las personas, y una concepción del derecho orientado a la protección del orden jurídico, en contra de la idea del derecho como medio de reclamación de condicionar mínimamente a la persona humana.

A raíz de esa comparación; entre la jurisprudencia y la doctrina se han tomado muchos enfoques, siendo los más relevantes dos: una que considera a la objeción de conciencia como una garantía de los derechos fundamentales como son el antes ya mencionado de libertad de conciencia y otra que considera una facultad legal conferida por el constituyente. De acuerdo a esta última posición la objeción de conciencia forma no sólo la prerrogativa de ser declarado eximido de un deber jurídico, que deberá ser enunciado en cada caso concreto, ya que, según esta posición, en una sociedad que se establece sobre el consenso mayoritario expresado por los ciudadanos, el permiso de un acto conductual que va a separar a la norma amplia y general que garantiza a todas las personas la conducta que establece la separación de la norma general a la específica para todas las personas la misma que se considera como aquella medida excepcional y no como aquel derecho específico y fundamental, entonces la objeción de conciencia no debería configurarse como un derecho fundamental.

En nuestro país se ha promulgado la Ley N° 29335 Ley de Libertad Religiosa; si bien ella conceptualiza en su dispositivo el articulado 4° a la objeción de conciencia como la objeción de la persona humana bajo el estricto cumplimiento de una norma

imperativa, que regirá conforme a sus convicciones de la moral de la religión señalando incluso en su artículo 3 expresamente el derecho del trabajador o estudiante a guardar el descanso sagrado que considere su religión siempre en armonía con los intereses de la empresa o entidad pública para la que labore; así como el derecho a prestar juramento conforme a sus convicciones religiosas o a exonerarse de cursos de religión por motivos de conciencia: lo cierto es que el ámbito de acción de la objeción de conciencia es mucho más amplio extendiéndose a diversos supuestos, como por ejemplo ocurre en materia sanitaria, cuando un paciente se opone a recibir determinado tratamiento por razones de conciencia o región o entre otros. Esta diversidad, propia de la pluralidad de pensamiento que hoy en día existe; ha conllevado al surgimiento de una preocupación por conocer la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia, sobre todo porque para un sector de la doctrina elevar ¡a objeción de conciencia a la categoría de derecho fundamenta! equivaldría a reconocer el derecho intrínseco a toda persona de desobedecer las leyes, hecho que de por sí involucra la negación del estado de derecho mismo.

Es claro que la libertad de conciencia es un derecho fundamental, pero resulta polémico afirmar lo mismo respecto a la objeción de conciencia sobre todo si a tenor de lo prescrito en artículo 3 de nuestra Constitución, la falta de reconocimiento expreso de derechos no significa la negación de otros inherentes a la persona.

La ausencia de un reconocimiento constitucional expreso al derecho a la objeción de conciencia, como sí sacada con la libertad de conciencia, involucra que su naturaleza jurídica no sea la de un derecho fundamental sino simplemente la de una facultad legal conferida por el legislador en determinados casos que incide en su ejercicio así como en la fricción legal que implica la idea de un estado preocupado por la promoción de las garantías individuales y una idea de derecho dirigida a la protección del orden público

1.1.1 Justificación e importancia

En medio de una realidad nacional en la que se advierte la necesidad de consolidar el sistema democrático por medio del fortalecimiento de las garantías individuales se imponen algunas reflexiones dirigidas a determinar si el derecho de una persona a apartarse del mandato legal, en razón de convicciones íntimas fundamentales en aspectos éticos o religiosos, es una facultad inherente a ella (derecho fundamental), una facultad de naturaleza política o una facultad otorgada por el legislador a modo de derecho subjetivo.

Desde una perspectiva social, la reflexión obedece al cada vez más creciente número de casos en los que se advierte el ejercicio de la objeción de conciencia, que contrasta con la posición de un amplio sector de la doctrina, en el sentido de que la objeción es una facultad legal que sólo debe ampararse si ha sido conferida expresamente y la del Tribunal Constitucional que lo considera como un contenido nuevo del derecho fundamental a la libertad de conciencia.

El presente trabajo de investigación pretende hacer un estudio de la objeción de conciencia como derecho constitucional otorgado por la constitución de 1993, estableciéndose así sus antecedentes, uso y reglamentación delimitando así que tipologías se enmarcan dentro del mismo y también conocer cuáles han sido los pronunciamientos por el máximo tribunal constitucional. Para sí poder determinar las razones principales por las cuales un ciudadano puede declararse abiertamente objetor de conciencia y cuando las razones en las cuales funda su objeción son válidas para el sistema jurídico nacional y aceptado por la sociedad.

1.2

1.3 Metodología empleada.

El presente trabajo de investigación es Observacional – Descriptivo, con análisis de contenidos.

- Descriptivo: Estudio que solo cuenta con una sola población de la cual pretendemos describir en función de las variables consideradas en el estudio.
- Observacional: Son estudios de carácter estadístico y demográficos, ya sean de tipo sociológico en los que no hay intervención por parte del investigador, y éste se limita a medir las variables que define en el estudio.

- Transversal: Estudio transversal debido en el cual se medirá una sola vez las variables en un momento dado, sin pretender evaluar la evolución de estas unidades en el tiempo.

1.3.1 Problema General

La anterior descripción nos lleva a formular el siguiente problema:

¿Existe relación entre la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico constitucional peruano, con el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de conciencia de parte de los ciudadanos?

1.3.2 Objetivo General.

Analizar la relación de algunos elementos jurídicos para la conceptualización y aplicación de la objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico peruano con el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de conciencia de parte de los ciudadanos.

1.3.3 Objetivos Específicos:

- 1) Precisar la definición de Estado, así como los roles que éste asume.
- 2) Precisar la idea de derecho como regulador del orden social.
- 3) Delimitar el contenido del derecho a la libertad de conciencia.
- 4) Determinar el contenido del denominado derecho a la objeción de conciencia
- 5) Identificar el tratamiento jurídico que la legislación nacional e internacional brinda a la objeción de conciencia
- 6) Delimitar las implicancias que conlleva reconocer a la persona el derecho a eximirse de un deber legal amparándose en la objeción de conciencia.,

1.3.4 Hipótesis.

La naturaleza jurídica de la objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico constitucional peruano, se relaciona con el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de conciencia de parte de los ciudadanos.

La objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico peruano no se constituye como un derecho autónomo sino como un contenido derivado de las libertades de conciencia y religión.

1.3.5 Variables:

Variable Independiente:

Naturaleza jurídica de la objeción de conciencia

Variable Dependiente:

Ejercicio efectivo del derecho a la libertad de conciencia

CAPÍTULO II

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del problema.

Internacionales

En el año mil novecientos cuarenta y seis, sucedió en caso relacionado a *Girouard vs United States*, donde la Corte Suprema de los EEUU resolvió que existía alguna veneración a la constitución si algún miembro de la iglesia adventista del Séptimo Día, si en casi se negara la aceptación para poder alistarse algún miembro hacia la defensa de la nación en los casos de guerra.

En el año mil novecientos setenta y uno, se pronunció respecto al caso *Cassius Clay vs. United States* donde la Corte Suprema de los EE UU, se pronunció en relación a la validez del derecho constitucional sobre la objeción de conciencia donde el reconocido boxeador cuando adoptó la religión musulmana donde se le negó a presentarse a las fuerzas armadas cuando sucedió la guerra del conflicto de Vietnam, sustentando que el Corán no le permitía que participen ningún fiel a aquella religión en una guerra, contrario sensu esta hubiese sido aceptada o pronunciada por Alá y ser alguna guerra santa.

Es así que desde la perspectiva del poder legislativo se muestra el inciso 3 del artículo 4 sobre la Ley Fundamental de Bonn del año mil quinientos cuarenta y nueve, donde se tipificaba que ninguna persona podría ser obligada a ir en contra de su conciencia a realizar el servicio militar con armas.

Esto se encuentra previsto en la Resolución N° 337 de 1967, de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa la misma en la cual señala de una manera tácita que se reconoce que la objeción de conciencia es aquella derivada de derechos fundamentales de la persona los mismos que también están tipificadas en el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Nacionales

En el caso del Perú tenemos muchos procesos que han sido presentados bajo el precepto de la objeción de conciencia sustentado en motivos filosóficos: de esa manera se ha podido acudir a la Asamblea constituyente del año mil novecientos setenta y ocho, donde el que lidera el FOCEP, Hugo Blanco Galdós, decidió negarse a juramentar su cargo ante el libro de la Biblia así como el crucifijo

se negó a jurar al cargo ante la biblia y el crucifijo; similarmente, Guillermo Olivera Díaz se negó a invocar a Dios al jurar al cargo de Juez penal en el distrito judicial de Lima. En los dos casos se ha tenido que alternar la parte de la tradición ceremonial, en las situaciones ateas de las personas objetoras.

Local:

En nuestro país, el Tribunal Constitucional a través del caso Lucio Rosado Adanaque (Expediente N° 0895-2001-AA/TC) señaló que la objeción de conciencia implica el reconocimiento de un “contenido nuevo” dentro de la libertad de conciencia.

2.2. Base Teórica.

2.2.1. Teorías relacionadas con la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia

Una aproximación a la definición de derecho fundamental y a la determinación de su contenido esencial.

Por medio del artículo 43° de la Constitución se reconoce que el Estado peruano es un Estado constitucional y democrático, consecuentemente, se sostiene en el principio de supremacía constitucional y la dignidad de la persona humana, como premisa antropológica que fundamenta los derechos fundamentales, los cuales son reconocidos como principios jurídicos constitucionales que garantizan la satisfacción de determinadas necesidades básicas del individuo. Es difícil dar una definición absoluta y concreta de derechos fundamentales, puesto que coexisten múltiples teorías, entre la filosofía política y el constitucionalismo, que han buscado aproximaciones conceptuales al tema, sin embargo, queda claro

que los “derechos fundamentales son derechos” o “principios esenciales” de toda sociedad para su convivencia en paz y democracia.¹

Así, refiere Prieto (2003) “que una Constitución es material significa aquí que presenta un denso contenido sustantivo formado por normas de diferente nominación (valores, principios, derechos o directrices) pero de idéntico sentido, que es decirle al poder no solo como ha de organizarse u adoptar sus decisiones, sino también que es lo que puede e incluso, a veces, que es lo que debe decidir”, es decir, estos derechos limitan al poder y evitan arbitrariedades por parte de quienes ejercen el poder sobre los individuos².

Otra definición de derechos fundamentales que tendrá carácter instrumental para el desarrollo del presente trabajo. Asumimos, la definición de Pérez Luño, quien explica, que los derechos fundamentales son el “conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”³

Con esta definición aceptamos que son los hombres concretos e históricos quienes son titulares de los derechos humanos, no obstante ser la naturaleza inmutable el título de los derechos, éstos se concretan y determinan en circunstancias históricas particulares, por lo que la historia los afecta, aunque poco y sólo accidental y no sustancialmente. Si esto es así, los derechos manifiestan esa dimensión jurídica propia de la persona humana, dimensión a la que se sujeta el Estado como garante de esa dignidad, mediante la garantía de los derechos fundamentales.

En esta línea, refiere Castillo (2010) “[...] y es que, en definitiva, la dignidad humana es el valor privilegiado de la Constitución sobre la cual se ha de orientar la entera actividad estatal, ya que la persona siempre será la finalidad del comportamiento estatal y nunca un medio, es el Estado para la persona y no la

¹ ALEXI: 2010, p.45

² PRIETO SANCHIS, 2007: 213 -214

³ PEREZ LUÑO, 2009: 49.

persona para el Estado. Como ha expresado el Tribunal Constitucional alemán, al ser humano le corresponde en la comunidad un derecho a ser considerado y respetado; por ello lesiona la dignidad humana reducirlo a mero objeto del Estado”⁴

Hemos seleccionada esta definición porque creemos que, además de tener en cuenta el carácter personalísimo que para el caso de la objeción de conciencia resulta fundamental, puesto que, los derechos fundamentales por responder a exigencias históricas no dejan de ser universales, en tanto que consideren al ser humano siempre como fin y nunca como medio, en ese punto radica su carácter universal.

Consideramos que un tema ineludible de la teoría de los derechos fundamentales ha sido la persona humana, como titular y eje de esos derechos, en la medida en que se constituye como un fin en sí misma y no como un medio y el Estado debe disponer toda su estructura bajo esa premisa kantiana de dignidad humana. En consecuencia, afirma Bidart (2008), “las irradiaciones del constitucionalismo futuro hacia el sistema de derechos presuponen la opción axiológica a favor de la ya citada centralidad de la persona humana en el Estado democrático, y dan por cierto que ningún espacio del “Estado-aparato” y del “Estado- comunidad” quedan ajenos”⁵

Siendo personas contextualizadas en un país concreto y en una sociedad determinada, tenemos que todos los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce para sus miembros.

Coincidimos en este punto con el autor Laporta cuando diferencia entre derechos – núcleo, que serían los reconocidos expresamente en el texto constitucional peruano, y los derechos – derivados, “que son aquellos que pueden considerarse implicados por los derechos – núcleo y que por lo tanto son susceptibles de ser obtenidos deductivamente a partir de estos”. Sobre esta distinción, regresaremos

⁴ CASTILLO, 2009: 7

⁵ BIDART, 2000: 330

posteriormente, cuando se desarrolle la objeción de conciencia en condición de derecho autónomo o derivado de las libertades de conciencia y de religión. Se centra entonces en que la persona humana tiene como garantía el reconocimiento de su dignidad, al margen de los conceptos que se desarrollan sea transcultural o transversal, la misma que viene permitiendo fundamentar a los derechos fundamentales dentro del respecto a la persona humana, tratándose como sujeto y no como objeto del derecho.

Hablar del derecho de las personas, especificamos a los derechos fundamentales, los mismos que van a corresponder en relación a la naturaleza de la persona humana así como los derechos que son inherentes a las personas, así mismo los derechos que están recogidos en el marco del derecho constitucional, o que hayan sido reconocidos en el marco internacional como los derechos humanos que aluden “a los derechos del hombre que han sido recogidos en el ordenamiento jurídico interno, generalmente en la primera de sus normas –la Constitución- y que gozan de tutela jurídica reforzada”, mas allá de que exista su positivización en los textos normativos, esto tiene carácter declarativo mas no constitutivo, puesto que se fundan en la naturaleza y dignidad humana”⁶.

En general los derechos constitucionales son fundamentales, porque no existe en la Constitución peruana derechos de las personas que no sean fundamentales, en los procesos del sistema peruano, la expresión relacionada a los derechos constitucionales van a significar la misma expresión en el derecho fundamental, conviniendo al optar por la primera expresión el caso del sistema peruano si bien con la expresión Derechos constitucionales significa lo mismo que la expresión Derechos fundamentales del sistema formado por dos grupos de derechos: derechos constitucionales fundamentales y los derechos constitucionales no-fundamentales o sencillamente derechos constitucionales, en los cuales los primeros estarían por encima de los segundos⁷.

⁶ CASTILLO, 2005: 40

⁷ IBID, p. 71

Hasta este momento hemos dado la primera premisa, sobre el concepto de derechos fundamentales. Sobre la segunda premisa, pensamos que la opción que hemos adoptado es la más adecuada a efectos del presente trabajo, ya que, permite sustentar, en primer lugar, que “los derechos existen porque existe una determinada realidad, el hombre, precisamente la naturaleza del hombre, la misma que conlleva una determinada dignidad, cuyo respeto supone el reconocimiento de una serie de principios como los principios de libertad o igualdad”⁸.

Por otro lado, porque sustenta la tesis no conflictivista de los derechos, de tal modo que el Derecho permite ejercer determinadas atribuciones o no lo permite. “La dignidad ontológica de la persona humana posee una significación esencial: la de constituir el fundamento de los deberes y derechos básicos del hombre ya que hay un derecho general en el cual se resumen los diversos derechos de toda persona humana: el ser tratados íntegramente como persona humana y no en virtud de razones o motivos particulares, sino en función de la dignidad ontológica del ser sustancial hombre”⁹.

La relevancia de este tema resulta crucial, pues si se parte como hoy se hace de la premisa conflictivista de los derechos, entonces la opción por determinar cuál derecho prevalece en el caso concreto, requiere recurrir a ciertas técnicas que permitan dicha solución, dígase el test de ponderación-proporcionalidad, la jerarquización o más aún hoy en día la argumentación de que un derecho prima sobre otro. “De esta manera mediante posiciones conflictivistas de los derechos fundamentales, se trata dar cobertura y legitimar situaciones que dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden llegar a configurar verdaderas vulneraciones al contenido constitucional del derecho”¹⁰.

⁸ IBID, p. 83

⁹ MASSINI, 1998: 202

¹⁰ CASTILLO 2009: 54

Así, se considera que la teoría no conflictivista es la más primordial para resolver los casos de objeción de conciencia, no solo por considerar la dignidad de la persona humana, sino porque la perspectiva conflictivista plantea al juzgador la realización de juicios *a priori* que van a incidir en la vida del objetor, cuando ante el primero se le presentan casos, que para él no resultan de conciencia.

No obstante, el concepto constitucional, *prima facie* no debe oponerse a la premisa de la cual partimos. Lo que se quiere dejar en claro es que el contenido de un derecho es esencial porque deriva de la naturaleza del mismo. Este tema podría implicar, siguiendo al autor, el cuestionamiento no sólo de la fundamentación del derecho sino del principio normativo constitucional, pues “es terrible que no se favorezca la plena normatividad de todo el texto constitucional, más grave es que precisamente se deje sin efecto (de modo general o concreto) las normas constitucionales sobre derechos, por la especial significación que para la existencia digna del hombre, para el Estado de Derecho e incluso para el concepto de Constitución, significan el reconocimiento, garantía y plena eficacia de los derechos de la persona”¹¹.

Los derechos, recuerda Castillo, se manifiestan de valores y principios que traen exigidos necesariamente por la naturaleza humana: dignidad humana, libertad e igualdad. Son valores o principios que no tienen su existencia limitada al campo moral o axiológico, sino que trascienden de él y se instalan en la base del ámbito jurídico de modo que la sola existencia del hombre hace que sea exigible su reconocimiento y consecuente tratamiento como ser digno, libre e igual que es. Este tratamiento es lo que le es debido al hombre por ser hombre, es decir, lo justo acorde a su naturaleza¹².

Si partimos de la premisa que hemos venido desarrollando, sobre el carácter absoluto de la persona humana y de su dignidad, los derechos que de ella se desprenden, son también absolutos, lo cual no significa que sean ilimitados, sino que como diría Cianciardo, brinda una “protección en sentido fuerte”. Ello no se

¹¹ IBIDEM

¹² IBID, p. 31

condice con la posición conflictivista que permite que un derecho “ceda” ante otro en caso de conflicto, es decir, aunque no exista jerarquía constitucionalmente establecida, se prioriza un derecho en desmedro del otro, en el caso concreto, mediante los mecanismos que ya aludimos, “dentro de este mecanismo de solución de conflictos, la supremacía de uno u otro derecho dependerá del baremo que se emplee para determinar la importancia de los derechos involucrados”¹³

En tal sentido, la ponderación se presenta como el método que permite resolver situaciones de tensión entre derechos, permitiendo una solución “justa”, pero lo realmente hace es legitimar situaciones que vulneran los derechos. Pero aún, terminan atribuyendo como contenido esencial del derecho algo que no pertenece al mismo, porque no se desprende de la naturaleza del mismo, ni mucho menos de la naturaleza de la persona ni de la finalidad a la que esta apunta, ni de los bienes humanos que ella requiere para su satisfacción.

Castillo señala, que, si las posiciones conflictivistas termina por afectar, vulnerar o lesionar derechos reconocidos en el texto de la Constitución, ¿cómo queda entonces el principio de normatividad de la Constitución? Indudablemente en casos resueltos desde una visión conflictivista de los derechos solo se está favoreciendo la normativa de un dispositivo constitucional – que recoge el derecho fundamental preferente-, en detrimento del dispositivo constitucional que recoge otro derecho... lo cual resulta complicado que no se favorezca la plena normatividad de todo el texto constitucional, más grave es que precisamente se deje sin efecto (de modo general o en concreto) las normas constitucionales sobre derechos, por la especial significación que para la existencia digna del hombre, para el Estado de Derecho e incluso para el mismo concepto de Constitución, significan el reconocimiento, garantía y plena eficacia de los derechos de la persona¹⁴.

¹³ CASTILLO, 2009: 50

¹⁴ IBID, p. 54

Además de dicha protección, esta absolutidad, implica que el derecho tiene un contenido esencial propio de su naturaleza. Este núcleo duro, que no cede nunca, no es accesible para el legislador, por lo que la interpretación y argumentación que se haga de los valores y derechos constitucionales “no se reduce únicamente a un mero examen de ley sino que se orienta a hacer respetar la unidad o núcleo constitucional de este derecho en cuestión en el caso concreto. Esto es, promoviendo la superación de las situaciones reales conflictivas de los diversos intereses que coexisten en el marco del Estado Constitucional de Derecho, a fin de otorgar una razonable aplicación de las normas constitucionales”¹⁵

No intentamos decir que sea una tarea fácil determinar el contenido esencial de los derechos, pero sí creemos que se debe apostar en la mayor medida a que dicho contenido partiendo de una correcta interpretación constitucional *ius* - fundamental, debe por un lado, coincidir con el contenido constitucional del mismo; y, por otro, que la interpretación sea coherente con el Derecho como instrumento al servicio de la persona humana y su dignidad, considerando para ello la finalidad de la misma.

Por ello, Cianciardo, la determinación del contenido esencial de un derecho fundamental guarda una estrecha relación con el examen de su finalidad. Si una conducta concreta se enmarca entre las que son idóneas para la realización del fin propio del derecho fundamental de que se trate... lo cual implica *contrariu sensu*, que puede ser prohibida toda conducta que no resulte apta para alcanzar inmediata ni mediatemente la finalidad de alguno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución¹⁶.

En ese sentido, siguiendo a John Finnis, podemos decir que “la materia de los derechos humanos viene dada por los bienes humanos básicos”. Es decir, que el contenido de los derechos fundamentales está delimitado por lo que es bueno

¹⁵ TRIEPEL, 1986: 42

¹⁶ CIANCIARDO, 2000: 279

para el ser humano, es decir, por lo que es un bien humano, en tanto que este lo perfecciona porque satisface sus necesidades humanas básicas.

Finnis indica como camino metodológico para el teórico en su formulación o reformulación de conceptos, la de “un ir y venir entre, por una parte, las estimaciones sobre el bien humano y sus exigencias prácticas y, por otra, las descripciones explicativas (empleando todas las convenientes técnicas históricas, experimentales y estadísticas para descubrir todas las interrelaciones causales relevantes) del contexto humano en que de diversos modos se alcanza o de diversos modos se destruye el bienestar humano¹⁷.

Así como no cabe derivar los propios juicios básicos sobre los valores humanos y las exigencias de razonabilidad práctica mediante alguna inferencia a partir de hechos de la situación humana, tampoco cabe reducir la ciencia social descriptiva a una apología de los propios juicios éticos, políticos o ideológicos, ni un proyecto para repartir aprobaciones o anatemas, entre los actores de la escena humana¹⁸.

Con todo eso, delimitar éste contenido en función de los bienes humanos, que se van a traducir en contenidos jurídicos ha estado sujeto a múltiples críticas que tildan dicha postura de perfeccionista o paternalista, sin embargo, dice Massini, que los autores que dicen oponerse al paternalismo han de partir también – necesariamente- de alguna concepción del bien humano para fundar su oposición al accionar de sus oponentes. Esta idea es la concepción ultra-individualista, que considera al hombre como plenamente autónomo y absolutamente libre, capaz de crear racionalmente las normas y paradigmas de su propio obrar. Pero al suponer esta concepción del hombre y del bien humano, bien al que conciben radicando en el mero ejercicio de la autonomía individual, los “liberales” caen también inevitablemente en un paternalismo de sentido contrario, que se concreta en la exigencia de orientar la legislación, las decisiones de los jueces y

¹⁷ VIGO, 2006: 367

¹⁸ MASSINI, 1998: 205

las políticas de gobierno en el sentido de promoción y difusión de ese modelo humano.

Continuando con el referido autor, bien sabemos que por la experiencia la razón humana descubre o debería descubrir, si ésta ha sido bien ejercitada en la verdad, aquello que la perfecciona, sin embargo, lo difícil es la concreción o realización de dichos bienes que forman un conjunto, valga la redundancia, de bienes humanos que le son debidos a la persona humana por su naturaleza, y que van a suponer diversos grados de perfeccionamiento, y el derecho positivo debe avalar como un medio el mismo que significa, la consecuencia de los bienes humanos. De esta manera el derecho positivo no crea derechos sino mas bien los reconoce y garantiza con la finalidad que el derecho no sea quien provea a los medios que traen como consecuencia los fines o mas aun, al interponer los bienes humanos afuera del sustento garantizar como medio que es, la consecución de esos bienes humanos”¹⁹.

En esta línea, refiere Massini que “sin coexistencia, sin derecho que determine lo debido a cada uno y sin derechos de por medio de los cuales exigir eso que es debido, no es siquiera pensable la concreción o realización de los bienes humanos básicos; de aquí que sean estos bienes los que otorguen justificación racional y contenido a los derechos (...) cada derecho humano se ordena, por lo tanto, a la realización de uno o varios bienes humanos básicos y recibe a su vez su justificación objetiva”.

En el caso de la persona humana, se ha tenido como fin acorde con la naturaleza a todos los atributos, potencias y facultades de la persona que se han dado en el marco de la perfección, de esa extensión máxima de sus capacidades y posibilidades. Así los derechos que la persona tiene como atribuciones subjetivas que puede hacer valer frente al Estado apuntan también a considerar la finalidad de la misma.

¹⁹ MASSINI, 1998: 205

De esta manera se ha definido en esta investigación que algunos conceptos y nociones que ha sido tratados como primordiales, así como las premisas en la interpretación de los argumentos de derechos fundamentales, y las premisas en los tribunales son aquellos preceptos que han dado prevalencia a los intereses de grupo, que buscan adueñarse de algo que no tienen, por lo tanto, en realidad no reivindicar sino que buscan que les sea reconocido derechos o atribuciones jurídicas que no poseen. Es así que aquellos métodos de la posición conflictiva han tenido aquellos resultados esperados como son el reconocimiento de nuevos “derechos” que en la realidad no son tales, es decir, en la realidad objetiva, pero que han ido ganando terreno en la lucha por la libertad (mal entendida) de la persona humana.

Los derechos, nos recuerda Castillo, son manifestaciones de valores y principios jurídicos que vienen exigidos necesariamente por la naturaleza humana: dignidad humana, libertad e igualdad. Son valores o principios que no tienen su existencia limitada al campo moral o axiológico, sino que trascienden de él y se instalan en el ámbito de lo jurídico de modo que la sola existencia del hombre hace que sea exigible su reconocimiento y consecuente tratamiento como ser digno, libre e igual que es. Este tratamiento es lo que le es debido al hombre por ser hombre, es decir, lo justo. Y en la medida que ese reconocimiento y tratamiento es lo justo, se hace igualmente debido y exigible²⁰.

Asimismo, Castillo, consideramos que el contenido constitucional de un derecho es aquel contenido que se define en función del texto constitucional, y que es limitado, ilimitable y delimitable. Lo primero pues todo derecho fundamental tiene sus propios límites, inmanentes o internos, los cuales definen el contenido esencial del derecho y por lo que ese derecho es identificable como tal. Es ilimitable ya que nadie puede desconocer esas fronteras internas que vinculan de modo fuerte al poder quien no puede transgredirlas restringiendo, limitando o sacrificando el contenido constitucional del derecho fundamental que se trate. Finalmente es delimitable por cuanto el legislador, el órgano ejecutivo y el

²⁰ CASTILLO: 2005, p. 83

órgano judicial van perfilando con sus normas, actos y sentencias, el contenido constitucional del derecho fundamental en cada caso concreto. En todo caso, la labor del poder político es ir perfilando y sacando a la luz esos contornos o fronteras internas e inmanentes del contenido de cada uno de los derechos fundamentales, hasta quedar su núcleo duro el cual no es negociable²¹

La objeción de conciencia consiste en la negativa del individuo a someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible (provenga de la obligación de una norma, de un contrato, de un mandato judicial o una resolución administrativa), por razones axiológicas -un deber para su conciencia, diverso del planteamiento puramente psicológico de quien transgrede la norma para satisfacer un capricho o un interés vacío-, de contenido primordialmente religioso o ideológico, con el objeto de elegir lo menos lesivo para la propia conciencia entre las alternativas previstas por la norma, eludir el comportamiento contenido en el imperativo legal o la sanción prevista por su incumplimiento, o incluso, aceptando el mecanismo represivo, lograr la alteración de la norma que es contraria al personal imperativo ético (Navarro-Valls & Martínez-Torrón, 1997).

2.2.2. Teorías relacionadas con La libertad de conciencia.

Esta facultad se encuentra prevista en el inciso 3 del artículo 2 de la Constitución. En nuestro país su regulación constitucional se inicia con la Constitución de 1920. De manera concordante y con sujeción a lo establecido en la Cuarta Disposición General y Transitoria de la Constitución, el derecho a la libertad de conciencia se encuentra contemplado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1968); artículo iii de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes Ciudadanos (1948); y artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

Tomando en cuenta lo descrito por el emperador Constantino "Edicto de Milán", en donde se estableció que "eran necesarios arreglar ante todo lo concerniente a la reverencia debida a la divinidad para dar a los cristianos y a todos los demás,

²¹ CASTILLO, 2008: 80

la libre facultad de seguir la religión de su elección". Sin embargo, no obstante, lo dicho; posteriormente Constantino contradice sus palabras desencadenando una aterradora lucha por el paganismo.

Se puede decir que la conciencia es la capacidad de auto percibirse en relación a una idea o pensamiento, siendo dicha percepción ese carácter filosófico, político, religioso, entre otros. También señalaremos que la conciencia es un conducto de Es el "conducto" de distribución ética de la propia persona, sustenta la búsqueda de la persona con la autenticidad. Mediante la conciencia se percibe uno mismo en relación a las demás personas.

La conciencia es una sola potestad anterior. Implicando la opción en relación a lo espiritual siendo esta el sentimiento, la convicción, la fe o propio auto convencimiento; encontrándose fuera de la reglamentación de otra persona. Esta teoría se denomina como la "autonomía del pensamiento".

La libertad de conciencia, necesita ser sustentada, desde esta última, es decir la conciencia. Para el Diccionario de la Lengua Española sustenta sobre el vocablo conciencia:

1. Propiedad de la persona desde su espíritu para reconocer en sus actuaciones y en todos sus pensamientos que experimenta.
2. Conocer desde el interior lo que está bien y lo que está mal.
3. Conocer y reflexionar sobre sus actuaciones.
4. Es la actividad que realiza mentalmente la propia persona.
5. Suceso psíquico en la cual la persona va a percibirse en relación al mundo.

Podemos decir que la conciencia es la propiedad de la persona para auto percibirse y reflexionar sobre sus actuaciones, caracterizándose como un ser con ideas, es, por tanto, la propiedad del espíritu humano de percibirse a sí mismo en el mundo, como un ser que trabaja con ideas, conocimiento de la realidad, de la

ética y de su propia existencia. Es así que cuando se pierde la conciencia se cae en inconciencia²².

La conciencia es un sustento donde se realizan dos tipos de actos, uno de ellos de conciencia, y los religiosos, es así que las libertades que se desarrollan en bienestar de ambos, tiene como esencia a la conciencia.

El profesor Hervada, nos refiere que la conciencia es un dictamen de lo que la moral te dice que puedes hacer u omitir algún acto en alguna situación en la que está inmerso el hombre. El fundamento de la conciencia aflora en alguna situación específica y concreta. No podemos decir que la conciencia es algún enunciado, sino más bien es el juicio de deber en relación a alguna conducta que la persona va a realizar, o ha realizado.²³

Identificando a la conciencia como la dimensión donde se producen las creencias, pensamientos y convicciones que establecen la personalidad. Siendo algunos de los conceptos de raíz filosófica, ética o política, sin embargo, existen otros sustentos que describen la conciencia, los mismos que se caracterizan al no contar con elementos de referencia a alguna divinidad sustentan la identidad de la persona. Estos conceptos pueden tener raíz filosófica, política o ética, sin embargo, existen también algunos conceptos que determinan a la conciencia, pero se caracterizan al no tener elemento de moralidad de referencia a una divinidad o a los sobrenaturales, siendo propiamente religiosos. Teóricamente la libertad de conciencia y lo moral puede sustentarte, sin embargo, en la práctica estas son más complejas, debido a que son pensamientos o convicciones que funcionan paralelamente.

De esta manera podemos decir que la conciencia hace posible que las personas pongan atención a sus sensaciones, las organice de una manera ordenada y sea responsable de sus acciones, así como las consecuencias que derive de ella. De allí que la persona que tiene conciencia la misma que derivan diversas funciones, siendo alguna la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, la conciencia

²² RUBIO, EGUIGUREN Y BERNALES, 2011: 198 – 199

²³ HERVADA, 1984: 42.

actuara como un órgano de sentido permitiéndole a la persona calificar su forma de comportarse así mismo relacionándolo con los principios éticos y morales. Las personas que eligen hacer de manera consciente, ponen en juego sus valores y principios que los caracteriza con la elección que deciden hacer, asumiendo las consecuencias de dicha elección.²⁴.

La conciencia es aquella dimensión de las personas donde se encuentran los actos denominados juicios, los mismos que difieren un discernimiento, los valores, las creencias, intereses, la necesidad, siendo el juicio en libertad, dado a que solo así, cada persona puede ser responsable de sus actos.

Resulta que la conciencia es un fenómeno espiritual, siendo el resultado las decisiones que son difíciles de señalar con algún criterio objetivo y ser compartidos intersubjetivamente. El tribunal constitucional ha emitido un criterio en relación a la conciencia, señalando que decisión en conciencia es la decisión seriamente moral, señalando categorías de lo bueno y lo malo, circunstancias que la persona en una determinada situación experimenta para sí misma o para su interior impidiendo que actúe en contra de ella sin forzar su conciencia.²⁵.

En relación a otro criterio donde consta el sustento de la norma en relación a la conciencia, el autor Prieto Sanchis nos señala que un primer y radical de los sustento es el derecho que tiene las personas para que pueda escoger o realizar por su propia voluntad los resultados que crea convenientes a los conflictos que le plantea su propia vida, así como en la sociedad, al tener un buen comportamiento y de expresar lo que considera cierto. Es aquella que suele denominarse la libertad de pensamiento o de conciencia la misma que es aquella

²⁴ VELÁSQUEZ-CÓRDOBA Y CÓRDOBA, 2010: 171

²⁵ MARKIS KOTZUR, 2006: 25. Nos menciona que el presente texto ha sido publicado en un primer momento en Juristen Zeitung 1/2006, pp. 25-30, haciendo un análisis de la Sentencia de la Segunda Sala de lo Militar del Tribunal Contencioso-Administrativo federal alemán de 21 de Junio de 2005 (BVerwG 2 WD 12.04), bajo el título “Gewissenfreiheit contra Gehorsampflicht oder: der Irak-Krieg auf verwaltungsgerichtlichem Prüfstand”.

Resolución de la Sala, donde fundamenta su sentencia y se integra en la Web del Tribunal (<http://www.bverwg.de/media/archive/3059.pdf> que ofrece, tras los Leitsätze, donde encontramos el resumen y fundamento de la sentencia.

facultad del interior si no es la esfera en la que el poder y el derecho se encuentran incompetentes (cogitationis poenam nemo partitur), siendo la facultad que tienen las personas frente a sus actuaciones al comportarse conforme a sus creencias o costumbres.²⁶

Para el autor (Llamazares, 2011) la libertad de conciencia es un derecho propio y constitucional que resguarda la decisión de situar de la privacidad extrayendo a la inoperatividad del derecho.

En algunas circunstancias la libertad de conciencia es imperativa ante el derecho por ser un espacio personalísimo siendo la propia persona encargada de custodiar el mismo. Deviene de ello la importancia de la libertad al estar ligada al desarrollo de la persona y su identidad, no podemos confundir la libertad de conciencia con los derechos; si no por el contrario en la libertad de conciencia es aquella percepción de la persona sobre sí mismo siendo la libertad que tiene para desarrollarse²⁷.

Algunas posturas establecen que las desiciones del hombre alcanzan su madurez moral²⁸, nos encontramos entonces frente a la noción del ser humano y de la realidad, la conciencia moral no incorpora a la persona en la sociedad sino más bien p; son aquellos imperativos de la moral que el ser humano a formado y hace que sea lo que es, siendo determinante en su persona. Los imperativos si bien son exigibles a las personas, estos no lo serán para el estado que los garantiza.

Especificando el párrafo anterior nos damos cuenta que el objetar en función a la conciencia está señalado al ámbito de relación a una persona determinada de cuya conciencia se habla. Si bien se encuentra tipificado algunas cuestiones sobre la objeción de conciencia, lo importante radica en el conocimiento de dicha objeción que va a estar en potestad de la jurisdicción, delimitar los alcances en relación a la libertad de conciencia.

Pueden existir muchas objeciones de conciencia así como personas, dado a que cada persona va realizar un juicio crítico de manera distinta y manifestara diferente en relación a otra persona que también puede compartir una misma

²⁶ PRIETO SANCHÍS, 2004: 623

²⁷ LLAMAZARES, 2002: 18.

²⁸ JUAN PABLO II, 1993: 36

creencia, ideas y valores, pero cada juicio será diferente, como nos ha señalado el autor Mosquera, si bien la libertad de pensamiento es amplia la libertad de conciencia es única, refiriéndose a la opción que tiene una persona en relación a una determinada razón.²⁹

La Libertad Religiosa

Ya hemos definido la libertad de conciencia, pero se ha adelantado que la libertad religiosa tiene como sustento a la conciencia, podemos decir que las creencias que tienen connotación religiosa, será determinado en cada caso en concreto. Las creencias religiosas nacen desde la conciencia de la persona humana, teniendo que determinar a que llamamos religioso, que implica que algo tenga connotación religiosa y que pueda ser reconocido como el ejercicio de la libertad religiosa. El autor Llamazares nos dice que la libertad religiosa es aquella creencia (teológica o no), siendo un sistema de ideas y creencias.³⁰

La libertad religiosa esta prevista en el artículo 2 de la constitución inciso 3. Esta da su inicio en nuestro país regulándose en la constitución de 1920; siendo el derecho fundamental de toda persona de ser parte de una determinada religión de sus creencias en el dogma, de sus doctrinas, así como manifestarse pública y privadamente de las convicciones religiosas, así como practicar el culto. Como todo derecho el derecho a la libertad religiosa tiene un ámbito negativo puesto que garantiza la libertad de las personas para decidir en conciencia si no desea formar parte en actos de su propia naturaleza.

Tenemos en nuestro país la constitución establecido en la cuarta disposición general y transitoria, los derechos objeto de comentario se encuentran contemplados en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); el artículo III de la Declaración Americana de los Derechos y

²⁹ MOSQUERA, 2005: 158

³⁰ LLAMAZARES, 2002: 24

Deberes Ciudadanos (1948); y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

La Libertad de Culto

Este derecho se encuentra tipificado en el inciso 3 del artículo 2 de la constitución.

Se da inicio con la constitución primigenia de 1920.

De igual manera y concordante con sujeción a lo establecido en la Cuarta Disposición General y Transitoria de la Constitución, los derechos objeto de comentario se encuentran contemplados en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); el artículo III de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes Ciudadanos (1948); y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

Se debe entender a la libertad de culto como la facultad que tiene la persona humana para realizar actos, así como participar en cultos o ceremonias relacionadas a las creencias religiosas.

Cuando se forma la convicción religiosa surge la facultad de realizar los actos religiosos de culto, así como las asistencias espirituales por intermedio de los operadores (sacerdotes, ministros, entre otros). La libertad religiosa se expresa en el derecho a practicar el culto, así como en el derecho a creer.

Reconocimiento de la Libertad de Conciencia y de religión como Derecho de la Persona

Tras la Segunda Guerra Mundial, pocas han sido las Constituciones elaboradas que no recogieron de modo expreso una tabla de derechos fundamentales de la persona humana en su articulado. En ese catálogo del derecho de las personas no se puede subsumir el sancionar y proteger de buena manera la libertad de conciencia y de religión el mismo que se encuentra en el artículo 2:

"Toda persona tiene derecho: a la libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas y creencias.

Ejercer el derecho de confesión es libre, siempre y cuando este no Atente a la moral y al orden público.

La libertad de religión permite que las personas puedan manifestar y exteriorizar su fe de la forma que consideren correcta, limitando siempre que esta no altere el orden público ni la moral para realizar sus actividades.

Al respecto la libertad religiosa está garantizada a nivel constitucional y argumentada a través de la reiterada jurisprudencia que ha emitido los miembros del tribunal constitucional, más aún, así como toda libertad se encuentra sujeta a límites propios, es decir siempre y cuando no altere el orden público y las buenas costumbres, dado a que la libertad puede y debe mantener límites en relación al bien común.

(Idígoras, 1979)

2.3. La libertad de conciencia en el sistema constitucional peruano: legislación y jurisprudencia.

2.3.1. El reconocimiento de la libertad de conciencia en las constituciones peruanas.

La libertad de conciencia subsiste en los derechos fundamentales, así como los principios constitucionales, también ha sido tomada cuenta en el caso peruano, tanto en la legislación como en la jurisprudencia estos postulados vienen siendo recogidos. En esta tendencia, se puede mencionar que nuestro país viene trayendo consigo una serie de etapas en relación al desarrollo de la libertad religiosa, teniendo el desarrollo de cuatro fases: La primera corresponde a la etapa de las civilizaciones prehispánicas desde el periodo colonial y llega hasta 1915, año en que se modifica la constitución que apertura una segunda etapa histórico legal de tolerancia religiosa, la misma que fue superada con la constitución de 1979, donde se desenvuelve la etapa de la libertad religiosa.³¹

Es en este periodo donde termina la etapa que la llamamos pluralismo religioso y prevalencia de las libertades fundamentales.

³¹ HUACO, 2005: 59.

En este progreso denota el reconocimiento de las libertades las mismas que están ligadas a la libertad de religión católica como religión oficial del Perú, la misma que estuvo vigente hasta la constitución del año 1979, constituyéndose en el Perú un estado confesional. El Perú se ha definido como un estado que apoya a una determinada iglesia. Este régimen que reconoce la preponderancia de una iglesia le otorga privilegio de acuerdo a las tradiciones de nuestro país. En nuestro país predomina la iglesia católica.

La constitución política del 1993 en su artículo 2 inciso 3 reconoció a la libertad de conciencia y la religión bajo el argumento que todas las personas tienen el derecho de forma individual o asociada de ejercer sus ideas o creencias no existiendo ningún delito de opinión considerando todas las confesiones como libres siempre y cuando no altere la moral y el orden público.

Así mismo el Tribunal constitucional ha señalado que vincular a la libertad de conciencia con el libre desarrollo es muy amplio. La libertad de conciencia forma una gran convicción intelectual y moral en la persona, formando un conjunto muy amplio y complejo existente en los individuos³².

Según la doctrina nacional, el pensamiento y la libertad de conciencia son conceptos distintos. Puesto que su diferencia radica en el proceso mismo, en la libertad de conciencia se aprecia a uno mismo en su entorno por medio del entendimiento encadenado un mundo de ideas propias³³.

De allí que podemos considerar a la libertad de conciencia como la auto apreciación, la libertad de pensar de acuerdo a las ideas que se van formando se denominan la auto apreciación del entorno. La constitución debió señalar a la libertad de pensamiento y tipificarlo en su articulado, sin

³² NAVARRO VALL Y PALOMINO, 2002. 217

³³ RUBIO, EGUIGUREN, BERNALES, 2011: 201

embargo el hecho de no estar no significa que no se considere a la libertad de pensamiento inmerso de la libertad de conciencia.³⁴

En adelante estudiaremos la objeción de conciencia en la jurisprudencia y la legislación como fuente del derecho en el Perú.

2.3.2. La libertad de conciencia en la jurisprudencia constitucional peruana.

1. La objeción de conciencia y la sentencia N° 0895-2001-AA/TC

En dicho expediente presentado el día 19 de agosto del 2002 la persona de Lucio Valentín Rosado recurrió a la primera sala civil de la corte superior de justicia de Lambayeque un recurso de agravio por haber declarado improcedente el recurso de amparo contra el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga, a efectos que no se le obligue prestar servicios laborales los días sábados para no vulnerar su derecho constitucional a la libertad de conciencia y de religión.

El Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo resolviendo que el accionante no labore los días sábados, siendo la entidad demandada quien adopte las medidas con la finalidad de compensar las inasistencias. Además, según la sentencia este conto con dos votos singulares de los magistrados Rey Terry y Marsano Revoredo, quienes señalaron que la demanda debe ser declarada infundada. En la presente investigación nos centramos en los fundamentos que realiza el Tribunal Constitucional el mismo que ha reconocido la libertad de objeción de conciencia como parte de la libertad de conciencia.

En resumen, la sentencia del tribunal constitucional se resume en los siguientes criterios:

³⁴ IBID, p. 202 – 203.

- ❖ El Tribunal Constitucional ha establecido que libertad de conciencia se realiza cuando en relación a las ideas, y la libertad de religión tiene un significado y lo caracteriza en relación a las creencias, desarrollando un planteamiento más acertado dado a que la persona es considerada como unidad mas no como entidad.
- ❖ La libertad de conciencia y la libertad de religión son contenidos diferentes, pero no se desarrolla el precepto en relación a la conciencia, sino más bien el mismo tribunal correlaciona a los criterios de libertad de conciencia con el libre desarrollo de la persona humana mencionando que cuando se trata del contenido de la libertad religiosa se deslumbra el derecho que garantiza una decisión en conciencia.
- ❖ En la presente demanda nos encontramos frente a la libertad religiosa en la cual el accionante solicita no laborar los días sábados, al existir un mandato religioso que le impida trabajar dicho día.
- ❖ El tribunal constitucional establece que hay determinadas circunstancias que importa la emisión de una obligación de cumplimiento en relación con la libertad de conciencia o la religión que profesa, proviniendo de un mandato legal o constitucional.
- ❖ El tribunal al mencionar la doctrina que ha tomado encuentra para resolver fundamenta el origen de la ojección de la conciencia, sustentando que la finalidad del articulado de la constitución como un derecho implícito, el mismo que determinara cuando debe aplicarse un derecho nuevo, más aun el tribunal señala que aplicar el artículo 3 de la constitución no debe realizarse si es que haya algún derecho que pueda entrañar otra manifestacion, con la finalidad de no separar la aplicación de la cláusula del artículo 3 de la constitución quedando en reserva para reconocer alguna derecho que requieran pronunciamiento y protección.
- ❖ La libertad de conciencia también establece un segundo contenido, la objeción de la misma y al no reconocerse dicha objeción de conciencia se vulneraria la dignidad de la persona. El criterio del tribunal subsume la convicción personal con algunas posturas en relación a la conciencia que provengan de alguna religion.

- ❖ Ejercer la objeción de conciencia tiene un tipo diferente debido a que se trata de una facultad para no cumplir un mandato general, de lo contrario el criterio del tribunal no tendría el sustento suficiente jurídicos exigiendo la comprobación de la causa alegada.

Vamos a destacar algunos fundamentos sobre los votos discordantes: El magistrado Guillermo Rey Terry, señala que no es constitucional y concurrente la libertad de conciencia con la creencia de incitar tener algún trato privilegiado, el mismo que consiste en la presente demanda de no laborar un día sostiene a la semana por circunstancias de carácter religiosa. El magistrado sustenta que es un atributo fundamental sin embargo el mismo no alcanzaría para exonerar del trabajo solicitado.

La magistrada Delia Revoredo Marsano señala en su opinión en relación a la resolución que si bien el demandado no impidió que el demandante ejerza su derecho de conciencia y de escoger por una creencia de religión teniendo como exigencia que justamente labore los días sábados en el hospital, este es el punto de la demanda en cuestión puesto que el accionante pertenece a la Iglesia Adventista motivo por el cual no puede laborar dicho día siendo la solicitud de la demanda la exoneración como un ejercicio de la libertad de religión.

2. Sentencia recaída en el expediente N° 3283-2003-AA/TC

La presente demanda es un recurso extraordinario teniendo como accionante a las empresas “El Jeque Discoteque” y “Taj Mahal Discoteque”, demanda interpuesta contra una ordenanza municipal que prohibía el funcionar de los establecimientos comerciales en semana santa, alegando los demandantes la vulneración de los derechos de la libertad de conciencia de religión, de trabajo y de empresa. Los puntos que resaltan en la sentencia son los siguientes:

- ❖ En el proceso de amparo se destaca como idóneo contra las aplicaciones la norma legal, en el presente caso la ordenanza materia de debate vulnera los derechos fundamentales de las personas. Es aquí que el tribunal cita a los autores para sustentar doctrinariamente el concepto referido a la libertad, citando a los autores Carlos Santiago Nino y Javier Hervada, definiendo por un lado a la autonomía y por otro lado a la naturaleza antológica de la persona.
- ❖ El tribunal constitucional también define a la libertad de religión como las creencias indogmas en relación a la divinidad, siendo los sentimientos de veneración los que ajustan la conducta individual, prohibiendo la interferencia del estado o de la sociedad.
- ❖ La libertad religiosa es un derecho individual y colectivo y se cerca por cada persona que pertenece a una iglesia o comunidad religiosa, implicando establecer lugares de cultos para propagar su fe.
- ❖ Asimismo, el tribunal nos determina que junto a la libertad religiosa esta la libertad de culto, siendo esta la atribución para realizar actos, así como en ceremonia asociadas a las creencias religiosas, estableciendo a la religión o la fe como una libertad que supera el fuero interno para exteriorizarse en la sociedad, asistiendo a los lugares de culto y actos en relación a la divinidad.
- ❖ También establece límites a la libertad de religión y libertad de culto, desprendiéndose que el orden público y l moral son un conjunto de valores de un comportamiento cuya finalidad es el adecuado desenvolvimiento de la vida, aludiendo a lo básico y fundamental en la vida de la sociedad, siendo esta la razón por la cual se constituye las organizaciones y estructuras de la sociedad.
- ❖ El tribunal constitucional ha definido el interés público como aquel conjunto de las actividades o bienes que los ciudadanos consideren importantes para su coexistencia social, siendo de mucha relevancia este bien por ser de interés público el mismo que no deberá considerar algún interés particular.
- ❖ Profesar una religión viene implicando facultades que se basan en principios de inmunidad más no de discriminación. De aquí se deriva el

principio de inmunidad de coacción es aquel en el cual ninguna persona puede realizar actuaciones en contra de sus creencias religiosas, actuar de manera distinta a sus convicciones en donde también se incluye al ateísmo o al agnóstico, es así que ninguna persona será obligada a ser parte de los cultos, o ceremonias que deriven de un dogma religioso que no comparta, así como tampoco será obligada a prestar juramentos en las formas o convicciones. El principio de la no discriminación va a establecer a la prescripción de los tratos que menoscabe o restrinja la dignidad de las personas, así como que se les impida la actuación de los derechos fundamentales, o algún desempeño de las funciones de orden público que se encuentren condicionados o adheridos a una religión.

- ❖ Nuestro Tribunal también señala un principio relacionado a la no lesión de los derechos de terceros, que prohíba las conductas afectando la libertad de culto, así como que dañen los derechos constitucionales de las personas que creen y así como las que no creen.
- ❖ Sostiene así un estado aconfesional, así como la pluralidad de religión conforme al principio de incompetencia, tal es así que el gobierno ha reconocido a los espacios de la vida de las personas, así como su actuar, el tribunal nos refiere que la atribución personal, vivir conforme a alguna convicción relacionado a la conciencia, siendo aceptado o al negar que existe un Dios, y la esencia espiritual condicional. Siendo el derecho de religión una facultad para reconocer una verdad teológica, reconociendo el papel social y cultural realizado por una Iglesia, comunidad religiosa y desarrollo de las personas en la sociedad.
- ❖ Para finalizar el tribunal nos menciona que está normado en nuestra constitución la fe y la moral que caracterizan exclusivamente a la conciencia de las personas, más aún nos acepta que existe una aceptación de la religión católica establecida en el artículo 50 de nuestra carta magna.

- ❖ Asimismo, el tribunal constitucional realiza un aporte muy interesante que merece ser desarrollado en relación al principio de la no confesionalidad principio que está relacionado con la libertad de religión. Manifestando lo siguiente:

“(...) dentro de un Estado a confesional la relación entre el cuerpo político y las iglesias surgidas del reconocimiento al pluralismo religioso se rige por el principio de incompetencia reciproca; vale decir que, de un lado, el Estado reconoce la existencia de espacios en la vida de las personas en los que le está vedado regular y actuar. De manera concordante, las Iglesias aceptan como valladar ético y jurídico la intervención institucional en asuntos propiamente estatales”.

Así reconoció la profesión religiosa derivada de los derechos de realizar actos de culto y asistencia religiosa de la confesión; a realizar festividades y celebrar ritos de matrimonio; recibiendo e impartiendo las enseñanzas religiosas de cualquier índole conforme a las propias convicciones. Conforme a las facultades, se crean los principios de inmunidad de coacción y el principio de la no discriminación. El principio de inmunidad de coacción es aquel que refiere que ninguna persona al reconocer la profesión religiosa genera, por derivación, los derechos a practicar actos de culto y a recibir la asistencia religiosa de la propia confesión; a conmemorar las festividades y a celebrar ritos matrimoniales; así como recibir enseñanzas religiosas de cualquier índole. Conforme a las facultades se han generado principios como son de no discriminación y de inmunidad de coacción. El principio de inmunidad de coacción es aquel en el cual ninguna persona deberá ser obligada a actuar en contra de su creencia religiosa, complementado a ello ninguna persona podrá ser obligada a obrar de manera distinta a su convicción. El límite alcanza al ateo o agnóstico que puede ser incitado a participar de algún culto o coincidir con algún rito o

practica que deriva de un dogma religioso, así como a prestar juramento en alguna forma o convicción.³⁵.

El tribunal constitucional en la sentencia tuvo un voto discordante magistrada Delia Revoredo Marsano, la misma que no estuvo de acuerdo defiriendo en la sentencia en relación a la libertad de religión, siendo los puntos tratados en la cita anterior.

En esta jurisprudencia se ha desarrollado el contenido esencial del derecho a la libertad de religión, derecho tipificado en el artículo 2 inciso 3 en concordancia con el artículo 50 de la constitución. Implicando la confesionalidad del estado favoreciendo a la religión, asimismo reconoce la labor de la iglesia católica que ha desarrollado a lo largo de la historia desde la formación de la identidad nacional, por otro lado, señala el valor de la persona humana como digno la misma que desplegar desde su interior, es decir a lo espiritual, aquella que busca la verdad del dogma y la creencia que desea seguir, pudiendo las personas autoafirmar un valor y su libertad. El tribunal constitucional señaló que la dignidad humana es aquel valor del espíritu y moral inherente a las personas manifestándose en la autodeterminación de la conciencia y responsabilizando de su propia vida con la pretensión del respeto para los demás.

Ello implicaría que el estado no se encuentre neutro ante la práctica de la libertad religiosa sin embargo esto no significa que el estado favorecería a una determinada a una determinada religión en relación a otra, así como que fomente y promueva acciones para que la libertad de la religión pueda ser ejercida plenamente y no subsumida a un fuero interno como postula el laicismo.

3. Sentencia recaída en el expediente N° 2700-2006-PHC/TC

³⁵ MOSQUERA, 2004: 9.

El recurso interpuesto por una vulneración constitucional fue presentada por don Víctor Alfredo Polay Campos apelando la resolución emitida por la primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia por haber vulnerado el de derecho fundamental como son a la vida, a la dignidad, a la integridad física entre otros. Se señala también que el apelante que se encuentra recluido en un penal militar por el delito de terrorismo.

En el presente expediente el tribunal ha precisado los límites que tiene el habeas corpus, como garantía del proceso que se encuentran restringidos en relación a la libertad física, siendo este un habeas corpus correctivo se centrará el estudio en el presente caso:

- ❖ El contenido de la sentencia N° 0256-2003-HC/TC229, el colegiado señalo los criterios en relación a la libertad religiosa teniendo como prohibición de injerencia por parte del estado así como de los particulares en la formación de las creencias que se manifiestan, y por otro lado es el estado quien garantizara las comisiones para dichos derecho.
- ❖ El tribunal constitucional ha retomado el fundamento de a libertad religiosa con l practica cultural, en ello implicaría recibir la asistencia religiosa comparado al derecho, la creencia y la práctica. El concepto de trascendencia de la convicción religiosa se crea en el fuero interno del creyente en la práctica cultural.
- ❖ La libertad religiosa y el derecho a recibir consejería religiosa son parte del contenido, siendo necesario en la tranquilidad espiritual por la relación de la libertad religiosa como un principio de la dignidad de la persona humana.
- ❖ En el último punto se destaca su pronunciamiento del tribunal constitucional en relación a los ejercicios de otros derechos por parte de la persona privada de su libertad, siendo la libertad religiosa un derecho para ejercer siempre y cuando no alteren el orden público y la moral.

4. Sentencia recaída en el expediente N° 05680-2009-PA/TC

Este proceso de amparo se interpuso por la persona de Félix Wagner Arista Torres, quien se desempeñaba como Fiscal Adjunto Superior Titular de la Fiscalía Superior Mixta de Amazonas, contra la resolución de la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de Amazonas, alegando violación a su derecho a la igualdad y a no ser discriminado por motivos de religión.

El motivo de esta demanda se sustenta en dos resoluciones administrativas, la Resolución Administrativa N° 008- 99-MP-FSEGG-DJ-Amazonas, y la Resolución del Decanato Superior N° 012-2006- MP-FSD-Amazonas, resoluciones donde se establece que todos los días de cada año los trabajadores tenían que adorar la imagen del niño Jesús y la sagrada familia dentro del institución, siendo obligado todo el personal a participar en la actividad. Esta acción se declaró improcedente porque se consideró que el derecho invocado era de origen legal más no constitucional.

Analizando el presente caso se realiza una síntesis de los puntos de la sentencia de forma sustantiva y no procesal. El primer punto de análisis será ubicar cuales son los alcances de la libertad de religión en un modelo de estado reconocido por la constitución y que el tribunal desarrolla:

- ❖ El Tribunal constitucional menciona que se trata de dos derechos de contenido distinto definiendo que la libertad de conciencia es la potestad para realizar una determinada concepción deontológica de la vida siendo una capacidad para pensar o comportarse sujeto a la ética o moral donde la persona se relaciona o en el ámbito que se desenvuelve.
- ❖ La libertad de conciencia se sustenta internamente, a diferencia de la libertad de religión que trasciende el fuero interno de las

personas, más aún señala también que la libertad de conciencia es de manera externa cuando invoca a la objeción de conciencia.

- ❖ La libertad de religión, se establece en cada caso en cuestión siendo definida como una capacidad de la persona para auto determinarse con su comportamiento conforme su convicción y creencia en el plano religioso.
- ❖ El tribunal también ha desarrollado de manera profunda a la libertad de religión, estableciendo que por ella se asume las creencias y dogmas de la divinidad, desprendiéndose la explicación del estilo de vida de cada persona. Predeterminándose el comportamiento de las personas en relación a sus conductas, trayendo consigo cada creencia y orientación de las formas conductuales donde se expresa la conciencia o creencia religiosa.
- ❖ Asimismo, el tribunal reitera cuatro manifestaciones de la libertad de religión, teniendo como sustento que se puede expresar comprometiéndose con cooperación a la religión católica.
- ❖ Suma de importancia que el tribunal realiza una apreciación de la iglesia católica como institución formada en la historia del Perú, conforme a lo establecido en la propia constitución, más aún se precisa que dicha libertad no puede invadir alguna creencia o manera de pensar sin neutralizar la libertad religiosa.
- ❖ Continuando con el desarrollo el tribunal interpreta en relación a colaborar, por lo tanto es el estado quien facilita y condiciona la norma para que pueda ser ejercida la religión católica se establezca como una forma de percibir teológicamente el mundo, siendo esta colaboración una forma de abrirse a otras libertades de religión.
- ❖ El tribunal constitucional no aparta la publicación de actos y celebraciones religiosas, más aún podemos decir que las actuaciones de los trabajadores difieren de la obligatoriedad a quienes deberían de presenciar por estar subordinados en su estado laboral, atentando contra la libertad religiosa.

- ❖ Así mismo las tribunas nos manifiesta que la colaboración no es una obligación para que los entes del estado vengan imponiendo una participación en las actividades de confesión, las mismas que atentan a la libertad religiosa de quienes no son católicos, o peor aun los que profesan una libertad religiosa tampoco deberían verse obligados a que el estado especifique que momentos o actuaciones deberían hacer las prácticas de su propia religión.

- ❖ El Tribunal no descarta promocionar las actuaciones y actos de celebración religiosos, más aún difiere de la obligatoriedad que genera a los trabajadores quienes deberán decidir si asistir o no, sin embargo, al existir la subordinación laboral al ser trabajadores del estado, resulta evidentemente atentado contra la libertad religiosa.

- ❖ Más aun el Tribunal señala que su postura y cuestionamiento no se centra en las personas que lideran la institución sean personas con fe católica, sino más bien que las participaciones programadas en su entidad sean libres para todos quienes voluntariamente desean asistir, de ese modo o se vulneraría el derecho a la libertad religiosa.

- ❖ **En la referida sentencia** se tuvieron dos votos que discordaron correspondiente a los magistrados Vergara Gotelli y Calle Hayen. Para el magistrado Vergara Gotelli nos menciona que si bien su posición es declarar la demanda fundada, el también expresa otra opinión refiriendo lo siguiente: i) argumenta que si bien se hubiese analizado el fondo de la pretensión sobre la libertad religiosa, a efectos de poder emitir pronunciamiento y así aplicar el criterio de razonamiento sobre

el derecho antes mencionado, al haber sido establecido que las instituciones publicas obligue algún culto a las imágenes de la religión católica; al criterio del magistrado nos menciona que nuestra Constitución protege en su artículo 2 inciso 3, tipificando el derecho que tienen las personas de desarrollarse y auto-determinarse de acuerdo a sus propias creencias y alguna convicción religiosa, en el presente caso a que cada persona se desenvuelva conforme a la religión que profesa y que es decisión propia si lo desea realizar; con respecto a la libertad religiosa, nos menciona que es un derecho donde el Estado a través de sus instituciones no puede interferir en ningún estadio para tratar de obligar a realizar algún acto religioso. Es así que el segundo voto discordante, solo se refiere para el magistrado que las actividades que ha realizado la Fiscalía no han sido de carácter obligatorio, sino han sido meras actividades.

El comentario que nos ilustra en esta demanda señalada en el expediente N° 06111-2009-PA/TC, es donde los accionantes llegaron a realizar el recurso en el Tribunal dado a que los magistrados del Poder Judicial negaban los derechos solicitados a pesar que los mismos eran constitucionales, sino solo legales, siendo materia de hacer efectiva la debida tutela de los derechos en el fuero superior, donde la justicia constitucional así como a la efectividad del sistema judicial y de las garantías de la constitución. En el proceso iniciado, los fundamentos del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil es declarar improcedente la demanda, bajo el argumento de considerar que la pretensión invocada no se trata de algún contenido constitucional, según el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

5. Sentencia recaída en el expediente N° 06111-2009-PA/TC

En el presente caso se ha profundizado la jurisprudencia en relación a los criterios de la libertad religiosa, principio que ya está consagrado en nuestra constitución artículo 50, así como sobre presenciar a los símbolos religiosos en un estado, estos temas han sido desarrollados por la reiterada jurisprudencia internacional, debido a que el Tribunal Europeo ya ha definido un criterio en relación a la libertad de religión. No obstante podemos ver que se señala a un petitorio de recurso de vulneración constitucional demandando don Jorge Manuel Linares en contra de la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior, siendo un recurso de amparo en el cual el accionante ha solicitado retirar de las instancias judiciales los símbolos relacionados a la religión católica, como por ejemplo el Crucifijo y la Biblia, así mismo que se omitan en las declaraciones de las personas que se encuentran en un proceso judicial, la pregunta sobre la religión que profesan, alegando que al realizar estos actos de viene violando el derecho a la igualdad, a no ser discriminado por razón de religión, opinión o de otra índole. Es así que el Tribunal ha declarado la demanda como Infundada, a la primera pretensión sobre el retiro de símbolos religioso y declarando fundada el segundo petitorio, de omitir preguntas sobre religión.

En ese sentido, se realizará un resumen sobre los principales fundamentos de la sentencia:

- ❖ En una primera opinión toman como referencia al caso Lautsi contra Italia. Es allí donde, el Tribunal realiza una distinción sobre la libertad de conciencia y religión, especificando a la libertad de conciencia como la percepción deontológica y la libertad de religión como la posesión de un propio juicio moral o ético y de actuar conforme a dicho juicio.
- ❖ Es así que el Tribunal delimita la controversia en la cuestión religiosa y en el derecho de libertad religiosa, estableciendo que cada persona puede realizarse conforme a sus convicciones y creencias relacionadas a la libertad religiosa

- ❖ El Tribunal también ha citado como referencia a la Corte Interamericana en el caso de la “Última tentación de Cristo”, donde ha extraído la definición de libertad religiosa, señalando que los sustentos de una sociedad de democracia permite que las personas profesen, mantengan, difieran o expongan su religion o algun creencia de manera libre.
- ❖ Así mismo otro punto que se ha tomado en cuenta es la referencia a la actual “Ley de Libertad Religiosa”, Ley N° 29635, la misma que en su articulado 3° tipifica un lista de actuaciones del derecho a la libertad de religión, tales como: a) el derecho y potestad para poder proliferar alguna creencia o persecución relacionado a la religión religiosa que la persona libremente decida, significnado que es una libertad para poder decidir cual religion los va a identificar de manera plena o simultanea, por lo que la persona tiene toda la voluntad para continuar y proliferar alguna crrencia o religion, o de lo contrario también podrá negar y oponer a continuar participante de alguna convicción, siendo asi podemos decir que la persona pede decidir si cambia, continua o se transforma algun pensamiento relacionado a la religion, o sustituir su pensamiento por uno diferente, asi como la facultad que tienen todas las personas para publicar algun pensamiento o reservarlo en relación a alguna creencia o pensamiento religiocos, de esta manera el derecho se porotege para transmitir o no alguna creencia a otras personas.
- ❖ El Tribunal ha reiterado el principio de laicidad, mediante el cual el Estado no debe concurrir como un sujeto en la fe religiosa de los ciudadanos; así miso declara el principio de pluralismo religioso, desde una perspectiva constitucional y a uno a confesional suponiendo a ello alguna posición neutral y con igualdad de

condiciones par a las confesiones religiosas de las personas, así mismo señala que eso no significa caer en un Estado confesional no religioso.

- ❖ Siendo así el Tribunal ratifica el principio de colaboración, que se establece en la misma Constitución en su artículo 50° siendo aquel que le permite determinar la relación de los símbolos de religión en un estado como nuestro país. Así mismo nos reitera que la presencia de símbolos religiosos en la sociedad corresponde a la gran influencia que realiza la Iglesia Católica y por ello, los derechos del accionante no se consideran afectados, así mismo tampoco el principio de laicidad del país, tratándose de reconocer que los símbolos religiosos solo denotan una tradición en la sociedad.
- ❖ Es así que el Tribunal, establece que, si bien un crucifijo deba tener un significado de la religión, es también cierto que este posee un valor más cultural, relacionándolo a la historia, así como a la tradición del Perú, y que el hecho de conservar el mismo no implica un reconocimiento por parte de un estado laico, sino más bien desde un punto de vista conservador.
- ❖ Se ha definido que el solo hecho de tener un símbolo religioso en una entidad, no significa realizar algún acto de coacción u obligar a que alguna persona actúe contra de sus convicciones, sino más bien esta afectación no tiene implicancia para objetar la libertad de conciencia.
- ❖ El tribunal nos refiere que es muy importante el requisito de coacción para poder decir que se realiza una vulneración a la

objeción de conciencia, dado a que solo en estos casos podría existir una lesión a la libertad de religión, sin embargo esto no ha ocurrido al estar presentes los símbolos religiosos; el razonamiento que ha emitido el Tribunal Constitucional recoge lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la emisión de la sentencia referida en el punto número 3 donde señala *“con los símbolos religiosos cuyo retiro demanda el recurrente tampoco se priva o menoscaba el derecho de toda persona de conservar, cambiar, profesar o divulgar, con absoluta libertad, su religión o sus creencias”*.

- ❖ Es así que el principio de laicidad, el Tribunal ha señalado que el punto en cuestión determina el lado medio, dado a que es el estado quien debe proteger a una determinada confesión, peor aún el estado tampoco debe promover el ateísmo o el agnosticismo, o en su defecto en el ámbito público que no exista expresión religiosa, dado a que a criterio del Tribunal, si algún Estado tratara así protegería emociones subjetivas de las personas, antes que proteger los derechos fundamentales de la libertad de religión.
- ❖ En nuestra constitución, no regula que las personas puedan liberarse de la religión, porque ello va a implicar alguna exigencia, sino más bien se regula la libertad preferente que tienen las personas de elegir libremente la religión que decidan, siendo así que resulta contrario al artículo 50° de la Constitución, y el colegiado ha señalado que interpretar de esta manera significa eliminar toda una historia basada de tradiciones culturales del Perú, hecho relacionado a los símbolos religiosos que tienen las instituciones públicas.
- ❖ Siendo que al tratar de garantizar un pluralismo en el estado, no podría hacerse sin estar frente a la realidad, y todo esto es posible

cuando existen principios de tolerancia, los mismos que permitirán una coexistencia, además que es el mismo Tribunal quien de una manera particular analiza si la presencia de los símbolos en una institución pública y en este caso en el Poder Judicial, como la imagen de la Biblia, muy aparte de la connotación católica, su fundamento radica en el decir la verdad. Siendo que tal acción nos permite colegir una vinculación de religiosidad es así que la Biblia va a representar un esfuerzo por inducir a la verdad, siendo este un valor fundamental que se sustenta el sistema de justicia, así mismo el Tribunal concluye que la mera presencia de la imagen no es lesiva o violatoria de la libertad religiosa, a excepción que en base a los mismos símbolos sean obligados a que alguna persona realice “cánones de sujeción o vinculación en el orden de la región”.

- ❖ Es así que finaliza el Tribunal, pronunciándose en relación a las preguntas que se les hacen a las autoridades, las mismas que son relacionadas a la religión que profesan, siendo esto así resultaría contrario a la libertad de religión, pues la sola manifestación implicaría mantener una reserva sobre su creencia.

6. Sentencia recaída en el expediente N° 00928-2011-PA/TC

En el presente proceso se trata de un agravio constitucional que interpone la persona de José Manuel Campero representando a su menor hijo de 3 años de edad, en contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior, la misma que ha declarado improcedente el proceso de amparo interpuesta en contra del Obispado del Callao, cuyo petitorio radicaba en que se excomulgue al menor de la creencia católica, mediante la apostasía, figura regulada por el Código de Derecho Canónico y en esa línea, así mismo que la Parroquia en donde el niño recibió el bautizo conforme a la anotación de excomunión en la Partida de Bautismo. Realizando un análisis en relación al siguiente proceso:

- ❖ El criterio del Tribunal parte sobre determinar en la apostasía, como un acto de abandono de la Iglesia Católica, la misma que afecta una de las manifestaciones de libertad religiosa, en el presente caso la facultad de cambiar de la religión, para lo que el tribunal colegiado establece que dicha actuación no requiere de intervención o condicionamiento alguno.

- ❖ El sacramento del bautismo es registrada en un libro quedando como antecedente de un hecho histórico, el mismo que va a implicar la imposibilidad de tratar de cambiar la religión, dado a que no existe alguna posibilidad de formalizar algún cambio, el mismo que ha citado para ello la jurisprudencia del Tribunal Supremo español en el caso del Recurso N° 6031/2007, en donde se ratifica y establece que los datos consignado en el libro de bautismo no se hacen sino con la única finalidad de tener como acto histórico la realización de dicho bautismo en la fecha realizada y con la identificación de la persona.

- ❖ La persona que desea tiene la facultad para participar de otra religión y así poder hacer efectivo su libertad religiosa, sin ser necesario la inscripción de dicho acto en algún cuaderno de registro., así como tampoco de ninguna manera afectaría a que algún niño reciba una creencia en su educación con los principios morales conforme a las convicciones de los padres, haciéndose de conformidad con el artículo 13° de la Constitución, el mismo que señala la libre facultad que tienen los progenitores de escoger a que colegio de educación asistirán y participaran sus menores hijos, derecho también reconocido en el artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 12.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y finalmente en el artículo 3, inciso d) de la Ley de Libertad Religiosa.

- ❖ Nuestra Constitución no menciona a alguna pretensión para poder obligar a la Iglesia Católica, con la finalidad de formalizar la renuncia a la religión que se profesaba, sino basta con el abandonar y dejar de seguir una confesión religiosa sustentada para anotar el abandono de su creencia, esto no va a conllevar a que se vulnere la libertad de religión, sino obligar a la iglesia católica a que registre tal abandono de los creyentes, vulneraría el principio de calidad y confesionalidad, afectándose no solo la Constitución sino el Acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede.
- ❖ Abandonar la fe católica, puede realizarse ante el orden interno de la iglesia, conforme al derecho canónico, y formalizar dicho abandono de la creencia católica y confesión religiosa, no vulnera la libertad para establecer alguna renuncia al acto material del abandono, pues este último viene sustentado en el derecho de libertad religiosa, mientras que el primero corresponde al campo de la autonomía de las confesiones religiosas”.

CAPÍTULO III

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

De los fundamentos, antes expuestos se puede conceptualizar que la objeción de conciencia es un atributo de la libertad de conciencia y religión. Este atributo limita el cumplimiento de algún deber de orden jurídico, concretizándose al mandato de las conductas en el sentido positivo, de hacer, el mismo que crea un conflicto entre los principios morales y los religiosos que consisten en la persona.

Así mismo el conflicto de la norma hace que las personas vallan contra ella misma, y contra lo que atenta a la coherencia de los actos, así como la personalidad, en el punto donde la persona humana busca muchas veces ser consecuente con los actos y opciones. Se considera entonces que no se trata de

justificar algún principio religioso o moral de la persona, o de asignar algún valor conforme a la libre elección de los individuos, de sus planes de vida o de sus ideales propios. De esta manera las acciones se determinan por el libre albedrío de sus principios que tienen algún valor *prima facie*” (Prieto, 2003).

Los mandatos de orden jurídico tienen un respaldo de principios y derechos, de allí que es necesario señalar sobre cual mandato opera la objeción de conciencia, o mejor dicho cuando el objetar en función a la conciencia o con los preceptos religiosos. Es así que la persona que objeta bajo el fundamento de la conciencia (esto es en función a creencias religioso o no) no busca cambiar alguna norma o alterar alguna forma de pensar, sino más bien el de preservar el dictamen de conciencia y el comportamiento que deriva de ella, contando en su posición una presunción sobre la moralidad, la misma presunción que en algún estado podrá ser destruida, mas no en nombre de los principios ya sean formal y político o de la legitimidad democrática de la norma, sino más bien debido a la conducta del objetor que va a lesionar los valores sustantivos que incidan en los derechos de tercero o como también la dignidad de las demás personas. (Prieto, 2003).

Es aquí donde algunos autores mencionan y consideran que la objeción de conciencia es un derecho y un deber; sin embargo, la posición de esta investigación es de considerar que es un derecho, pero natural, no nuclear, dado a que solo puede ejercerse al margen de la libertad de conciencia y religión, siendo así es necesario resolver cuál es el contenido de la objeción de conciencia.

De esta manera, podemos decir la objeción es un acto que, si necesita ser ejercida, contrario, al quedar en el interior de una persona, no cumple con el mandato de orden jurídico. Siendo así se necesita exteriorizar la objeción mediante los mecanismos procesales propios que hemos realizado en la presente investigación, donde veremos que la vía idónea para poder solicitar la tutela judicial es el proceso de amparo.

El objetor de conciencia expide y solicita que no se exija algun deber jurídico que no comparta con su libertad de conciencia. Siendo este un derecho que esta tipificado, si la persona objetora no lo señala y lo expresa, ningún ente sabrá lo

que puede ocasionar en la persona que tiene algún conflicto en relación a su conciencia. De esta manera la persona que objeta deberá ejercer con libre albedrío la libertad de ideología y religión, siendo algo propio de la persona, la facultad y derecho que tienen de objetar. El objetor que se encuentra en una determinada posición, deberá manifestar sus convicciones y comportarse conforme a ellas. Debido a que es el mismo quien debería manifestar aquellas convicciones en relación a la moral dejando esa titularidad y facultad a la misma personas que fundamenta su objeción de conciencia (Roca, 1993, pág. 217).

Al hablar de conciencia, vamos agregar las cuestiones morales y las religiosas, donde quedara establecido que el derecho de objetar en relación a la conciencia se señalan a las razones, siendo que solo el deber jurídico con contenido moral, puede establecer la objeción de conciencia, agregando a ello el contenido religioso (Roca, 1993, pág. 53).

Así mismo se destaca que la objeción de conciencia es precisa y va a depender de la propia persona que la solicita y ejerce, dado a que existen diferencias en relación a la conciencia siendo aquellos hechos concretos, desde una situación determinada, mas no de suposiciones intelectuales. Siendo necesario establecer que un mismo deber puede desencadenar a la persona humana alguna deferencia relacionado a la conciencia y en algunos otros casos no” (Roca, 1993, pág. 54).

El autor Roca, así como otros autores nos establecen que se trataría del deber jurídico, puesto que la idea de objetar es aquel deber que esta sustentado en la norma, siendo aquella idea de objetar una obligación que tiene de cumplir en una primera forma, siendo la interrogante cuales son los deberes que pueda sustentarse para objetar.

CAPITULO IV

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El propósito de la investigación se basó en el análisis de la objeción de la conciencia en el orden jurídico, con la finalidad de comprobar si instituye como derecho autónomo, o se relaciona con la libertad de conciencia y religión. Para ello, se ha considerado determinadas sentencias de parte del Tribunal Constitucional, en conjunto con la Ley de Libertad Religiosa, la cual reconoce la denominada objeción de conciencia.

4.1. CONCLUSIONES

Siguiendo el objetivo general, se llegó a concluir lo siguiente con respecto a la objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico y la libertad de conciencia:

1. Apreciamos en el estudio realizado a la conciencia como aquel atributo en el cual el espíritu de la persona humana se descubre en el interior y se exterioriza al mundo, considerándose como una persona que mantiene ideas, las mismas que se relacionan a la adaptación de la realidad, de su ética, así como de la propia existencia humana. Es aquí donde en la conciencia se producen los pensamientos, creencias, así como las convicciones que se basan en la identidad de las personas. Estos conceptos son aquellos que tienen un fundamento filosófico, ético y político: sin embargo, también existen entre otras teorías que nacen de la conciencia caracterizándose de contener algunos elementos en relación a la moralidad de trascendencia, así como los de referencia a un poder divino, a lo sobrenatural que tienen contenidos religiosos.
2. Siendo así la conciencia tiene sus sustentos funcionales, en todos los actos que tiene la persona denominados juicios, que van a implicar aquel discernimiento, la ponderación de los valores las necesidades, las creencias, los intereses formándose el juicio de forma libre, es sí que la persona tiene una responsabilidad de sus actos. Más aun, la objeción de conciencia no es sino la conducta del ser humano que exteriorizara ante el mundo denominándose juicio, de esa manea es el estado quien deberá garantizar y

legalizar aquella dimensión del ser humano que haga desplegar su autodeterminación.

3. Así mismo considero que la objeción de conciencia viene a ser un atributo de las libertades de conciencia y religión, las mismas que se encargan de limitar el cumplimiento de los deberes jurídicos a efectos que se concreten los mandatos de la conducta en el sentido positivo, habiendo realizado la misma entrara en los conflictos con los principios religiosos así como morales que tiene la persona, de tal manera que el problema radicara en que la norma no puede obligarlo a ir en contra de ella misma, atentando con los propias actuaciones de la persona las mismas que deberán ser consecuentes con sus actos de forma coherente.
4. Además la objeción de conciencia mantiene un amplio espacio en el ordenamiento jurídico, con la finalidad de alzarse como uno de los atributos de las libertades de conciencia y religión, la misma que le permite a la persona humana solicitar las exoneraciones por intermedio de mandatos jurídicos, esto es interponiendo demandas, puesto que no se tratan de elecciones libre donde el estado deberá interferir, sino más bien se trata de las creencias de las personas que tienen que tener un contenido más jurídico para que el estado pueda imponerse, sin perjuicio de que los mandatos judiciales apliquen imposición de ideas peticionadas.
5. Ya nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en las referidas sentencias que se refieren a la objeción de conciencia y en la mayoría se tratan de casos de libertad de religión. Siendo así que solo una sentencia (STC N° 0895-2001-AA/TC) se trata propiamente sobre la objeción de conciencia y, en ese sentido el Tribunal ha confirmado que la libertad de conciencia mantiene aquel fundamento nuevo denominándolo “objeción de conciencia”, la misma en el cual su ejercicio es de carácter excepcional al tratarse sobre el permiso que autoriza no cumplir con un mandato general sino más bien este se tiene que relativizar en fuerza de los mandatos jurídicos. Desconociendo esta interpretación, la Ley de Libertad Religiosa restringe los alcances de la objeción de conciencia a deberes y obligaciones legales.

4.2. RECOMENDACIONES

1. La presente tesis recomienda no reconocer el derecho autónomo a la objeción de conciencia dado a que solo basta sentar como fundamento y en aras de la conciencia las creencias del orden religioso o no, así mismo podrían existir colisiones con mandatos jurídicos, de tal manera que la persona pueda perjudicarse en lo más interno de sí, en su conciencia, y así pueda exonerarse de los mandatos judiciales. En relación a esta definición las libertades de conciencia y religión permiten la objeción de dichos mandatos, bajo ciertas condiciones y particularidades.
2. Así mismo la objeción de conciencia dentro de la ley, no es un derecho autónomo, sino es más bien un atributo de la libertad de conciencia y religión, recomendándose que el contenido de los argumentos debe ser suficientes para ser ejercidas, siendo así se considera se le considera como una derivación de los derechos nucleares. Así mismo en la ley no se ha establecido que se tratara de un derecho, sino más bien lo reconoce como ya forma de eximición de cumplir alguna norma legal, minimizando la posibilidad a los mandatos imperativos de carácter religioso o moral, los mismos que hayan sido reconocidos por la entidad religiosa a la que pertenece la persona
3. Surge la discrepancia entre la ley y la interpretación del Tribunal Constitucional las mismas que vienen generando algunos problemas en relación a la libertad de conciencia en el Perú. Puesto que como reconoce el Tribunal Constitucional, este es un derecho (no autónomo), y que proceso será determinar si corresponde al derecho a la libertad fundamentado; definiendo que es un derecho, y se debe recomendar que mecanismo sería el idóneo para solicitar, la misma que deberá contener la carga de alegar que el imperativo de conciencia moral o religioso está dentro de la doctrina de la entidad religiosa a la que se pertenece y que haya sido debidamente reconocida.

4. Para finalizar se recomienda considerar que la objeción de conciencia no es un supuesto de desobediencia dentro del Derecho sino más bien radica en una atribución de las libertades de conciencia y religión, debido a que no todo incumplimiento, exoneración e inaplicación de la norma, sería alguna forma de desobedecer al Derecho. En el derecho muchas veces genera actuaciones de injusticia, y por eso se implica o se cuestiona la norma de manera general hasta lograr su sustracción del sistema legal, aun cuando la misma tenga un origen de orden legal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alexy, R. (2010). *Una teoría de los derechos constitucionales*. Oxford: Oxford University Press.
2. Castillo, L. (2007). Los Derechos Humanos: la persona como inicio y fin del derecho. *Foro Jurídico: revista de derecho*, 27-40.
3. Castillo, L. (2008). *Derechos fundamentales y procesos constitucionales*. Grijley.
4. Chavez, J. C. (2011). *El fundamento de los derechos humanos en las sentencias del Tribunal Constitucional Peruano: el concepto de dignidad humana en tensión entre la mera autonomía y la libertad ontológica*. Zaragoza, España: Universidad de Zaragoza.
5. Córdoba, L., & Palacio, R. (2010). Objeción de conciencia y la antropología filosófica. *Persona y Bioética*, 167-175.
6. Gascón, M. (1990). *Objeción al Derecho y objeción de conciencia*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
7. Huaco, M. (2005). *Derecho de la religión: el principio y derecho de libertad religiosa en el ordenamiento jurídico peruano*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Universidad Peruana Unión.
8. Idígoras, J. L. (1979). *Iglesia y Estado en la Constitución Peruana*. Lima: Colecciones CAPU. Pontificia Universidad Católica del Perú.
9. Kotzur, M., & Méndez, C. (2009). Los derechos fundamentales en Europa. *Revista de derecho constitucional europeo*, 73-100.
10. Llamazares, D. (2011). *Derecho de la libertad de conciencia II. Conciencia, identidad personal y solidaridad*. Madrid: Editorial Civitas.
11. Macioce, F. (2010). La objeción de conciencia. In *Estado, ley y conciencia*. Marcial Pons., pp. 177-186.

12. Martínez-Torrón, J. (2005). Las objeciones de conciencia de los católicos. *Ponencia presentada en las XXV Jornadas de la Asociación Española de Canonistas*. Madrid.
13. Massini, C. (2006). *La Ley Natural y su interpretación contemporánea*. Navarra: Ediciones Universidad de Navarra S.A.
14. Mora-Restrepo, G. (2011). Objeción de conciencia e imposiciones ideológicas. El Mayflower a la deriva. *Estudio Socio-Jurídico*, 2(13), 249-273.
15. Mosquera, S. (2004). Un conflicto entre conciencia y ley en el ordenamiento peruano: comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de agosto de 2002. *Revista de Derecho, Universidad de Piura*, Vol. 5 pp.469-509.
16. Navarro, R., & Palomino, R. (2001). *Estado y religión. Textos para una reflexión crítica*. Barcelona: Ariel.
17. Navarro-Valls, R., & Martínez-Torrón, J. (1997). *Las objeciones de conciencia en el derecho español y comparado*. Madrid: McGraw-Hill.
18. Palomino, R. (1994). *La objeción de conciencia*.
19. Perez, A. (1984). *Derechos humanos, estado de derecho y constitución*. . Tecnos, Editorial SA.
20. Prieto, L. (2003). *Justicia constitucional y derechos fundamentales*. Castilla: Editorial Trotta.
21. Roca, G. (1993). *La objeción de conciencia en la Constitución Española*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
22. Rubio, M., Eguiguren, F., & Bernal, E. (2010). *Los Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
23. Sales, C. (2016). *Objeción de conciencia a tratamientos médicos*. Lérida, España: Universidad de Lérida, Tesis de bachiller en Derecho.

CONSTANCIA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Oswaldo Alberto Mendoza Otiniano, asesor de la tesis del estudiante, Leandro Marcelino Acuña Fabian, titulada:

La naturaleza jurídica del derecho a la objeción y su relación con la libertad de conciencia en el ordenamiento constitucional Peruano – periodo Mayo -Octubre 2017

Luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 20% verificable en el reporte de similitud del programa turnitin.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio, a mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional pedro Ruiz Gallo.

Chiclayo, 10 de noviembre de 2022



Dr. Oswaldo Alberto Mendoza Otiniano

ASESOR



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega:	Leandro Marcelino Acuña Fabian
Título del ejercicio:	relación de algunos elementos jurídicos para la conceptuali...
Título de la entrega:	relación de algunos elementos jurídicos para la conceptuali...
Nombre del archivo:	TESIS_LEANDRO_ACU_A_-28FEB19..PARA_SUSTENTAR.docx
Tamaño del archivo:	87.1K
Total páginas:	51
Total de palabras:	15,195
Total de caracteres:	79,204
Fecha de entrega:	10-nov.-2022 07:05a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre...	1950116420



Dr. Oswaldo Alberto Mendoza Otiniano

ASESOR

TESIS

INFORME DE ORIGINALIDAD

20%	12%	1%	16%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Trabajo del estudiante	12%
2	Repositorio.Upagu.Edu.Pe Fuente de Internet	4%
3	repositorio.upn.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	cienciadigital.org Fuente de Internet	1%
6	repositorio.unprg.edu.pe:8080 Fuente de Internet	1%

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Activo



Dr. Oswaldo Alberto Mendoza Otiniano

ASESOR